

EDJ 1994/13609

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, S 9-12-1994, nº 16798/1990

Comentada en "Las inmisiones dañosas en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 31 de mayo de 2007"

Resumen

En el caso López Ostra contra España el TEDH declara la violación del art.8 al estimar que las autoridades no tomaron las medidas necesarias para proteger los derechos al respeto del domicilio y la vida privada y familiar de la demandante.

NORMATIVA ESTUDIADA

Conv. de 4 noviembre 1950. Convenio Europeo para la Protección Derechos Humanos y Libertades Fundamentales
art.3 , art.8 , art.50

CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

AGOTAMIENTO RECURSOS INTERNOS
CONDICIÓN DE VÍCTIMA
DERECHO AL RESPETO DE LA VIDA FAMILIAR
INDEMNIZACIÓN POR VIOLACIONES DEL CONVENIO
EN GENERAL
TORTURA Y MALOS TRATOS

FICHA TÉCNICA

Procedimiento:Procedimiento ante el TEDH

Legislación

Aplica art.3, art.8, art.50 de Conv. de 4 noviembre 1950. Convenio Europeo para la Protección Derechos Humanos y Libertades Fundamentales

Jurisprudencia

- Citada en el mismo sentido por SAN Sala de lo Contencioso-Administrativo de 15 noviembre 2002 (J2002/118257)
- Citada en el mismo sentido por SAN Sala de lo Contencioso-Administrativo de 24 junio 2003 (J2003/247832)
- Citada en el mismo sentido por STSJ Andalucía (Mál) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 16 junio 2003 (J2003/257125)
- Citada en el mismo sentido por SAP Badajoz de 25 octubre 2004 (J2004/158124)
- Citada en el mismo sentido por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 14 mayo 2004 (J2004/182774)
- Citada en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 30 abril 2004 (J2004/194676)
- Citada en el mismo sentido sobre LIBERTAD DE EMPRESA por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 2 junio 2004 (J2004/196055)
- Citada en el mismo sentido por AAP Sevilla de 20 diciembre 2004 (J2004/266218)
- Citada en el mismo sentido sobre ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS - CONTROL - Medidas correctoras - Ruidos, DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL por SAN Sala de lo Contencioso-Administrativo de 1 julio 2004 (J2004/272126)
- Citada en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad horizontal - Elementos privativos - Prohibición de realizar actividades inmorales, peligrosas, incómodas o insalubres por SAP Badajoz de 14 julio 2004 (J2004/99928)
- Citada en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - DERECHOS DE LA PERSONALIDAD - Intimidad personal y familiar por STSJ La Rioja Sala de lo Contencioso-Administrativo de 18 febrero 2005 (J2005/11809)
- Citada en el mismo sentido por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 13 junio 2005 (J2005/142384)
- Citada en el mismo sentido sobre ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS - CONTROL - Medidas correctoras - Ruidos, DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL, DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - ÁMBITO Y ALCANCE - Vulneración por STSJ Cantabria Sala de lo Contencioso-Administrativo de 10 octubre 2005 (J2005/179133)
- Citada en el mismo sentido por SAN Sala de lo Contencioso-Administrativo de 10 junio 2005 (J2005/190208)
- Citada en el mismo sentido por SAP Valencia de 9 septiembre 2005 (J2005/204323)
- Citada en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad horizontal - Ejercicio de acciones - Legitimación activa - Del presidente por SAP Valencia de 7 octubre 2005 (J2005/204391)
- Citada en el mismo sentido por SAP Segovia de 21 octubre 2005 (J2005/223830)
- Citada en el mismo sentido por SAP Segovia de 15 noviembre 2005 (J2005/250097)

Citada en el mismo sentido por SAP Salamanca de 12 diciembre 2005 (J2005/277695)

Citada en el mismo sentido por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 14 diciembre 2005 (J2005/291251)

Citada en el mismo sentido por STSJ Andalucía (Sev) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 6 junio 2005 (J2005/319791)

Citada en el mismo sentido por SAP Vizcaya de 28 febrero 2005 (J2005/33281)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 3ª de 6 mayo 2005 (J2005/76774)

Citada en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - DERECHOS DE LA PERSONALIDAD - Intimidad personal y familiar por STSJ Cataluña Sala de lo Contencioso-Administrativo de 10 febrero 2005 (J2005/97135)

Citada en el mismo sentido por SAP Granada de 10 febrero 2006 (J2006/110246)

Citada en el mismo sentido por SAP Jaén de 20 marzo 2006 (J2006/30179)

Citada en el mismo sentido por SAP Barcelona de 20 marzo 2006 (J2006/32203)

Citada en el mismo sentido por STSJ Cast-La Mancha Sala de lo Contencioso-Administrativo de 17 marzo 2006 (J2006/37480)

Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 31 enero 2006 (J2006/389567)

Citada en el mismo sentido por STSJ Cast-León (Vall) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 22 diciembre 2006 (J2006/397328)

Citada en el mismo sentido por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 4 octubre 2006 (J2006/414770)

Citada en el mismo sentido por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 5 septiembre 2006 (J2006/415579)

Citada en el mismo sentido por STSJ Cataluña Sala de lo Contencioso-Administrativo de 10 febrero 2006 (J2006/433890)

Citada en el mismo sentido por SAP Baleares de 10 marzo 2006 (J2006/43660)

Citada en el mismo sentido por SAP Barcelona de 20 julio 2006 (J2006/464480)

Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 17 octubre 2006 (J2006/465146)

Citada en el mismo sentido por SAP Barcelona de 20 marzo 2006 (J2006/470655)

Citada en el mismo sentido por SAP Valencia de 8 febrero 2006 (J2006/486555)

Citada en el mismo sentido por SAP Cáceres de 19 abril 2006 (J2006/49402)

Citada en el mismo sentido por SAP Valencia de 27 enero 2006 (J2006/51963)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 3ª de 19 abril 2006 (J2006/59588)

Citada en el mismo sentido por STSJ Cast-León (Vall) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 24 marzo 2006 (J2006/70185)

Citada en el mismo sentido por SAP Cáceres de 31 mayo 2006 (J2006/90032)

Citada en el mismo sentido por SAP Soria de 14 marzo 2007 (J2007/125222)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 3ª de 12 marzo 2007 (J2007/15884)

Citada en el mismo sentido por STSJ Murcia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 29 marzo 2007 (J2007/186882)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 3ª de 12 noviembre 2007 (J2007/206238)

Citada en el mismo sentido por STSJ Canarias (LPal) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 22 junio 2007 (J2007/209295)

Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 1 octubre 2007 (J2007/218160)

Citada en el mismo sentido por STSJ Andalucía (Mál) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 30 abril 2007 (J2007/225828)

Citada en el mismo sentido por STSJ Murcia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 29 marzo 2007 (J2007/24113)

Citada en el mismo sentido por STSJ Murcia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 16 febrero 2007 (J2007/24114)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 3ª de 26 noviembre 2007 (J2007/243287)

Citada en el mismo sentido por SAP Granada de 7 septiembre 2007 (J2007/254508)

Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 11 abril 2007 (J2007/278589)

Citada en el mismo sentido por SAP Las Palmas de 5 noviembre 2007 (J2007/296479)

Citada en el mismo sentido por SAP Las Palmas de 8 noviembre 2007 (J2007/296702)

Citada en el mismo sentido por SJdo. Cont-Advo. de 27 diciembre 2007 (J2007/314811)

Citada en el mismo sentido por SAP Jaén de 24 octubre 2007 (J2007/354406)

Citada en el mismo sentido por STSJ Galicia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 25 octubre 2007 (J2007/368804)

Citada en el mismo sentido por STSJ Andalucía (Mál) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 27 noviembre 2007 (J2007/377269)

Citada en el mismo sentido por STSJ Canarias (SCr) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 26 enero 2007 (J2007/55518)

Citada en el mismo sentido sobre INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS - DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN - Importe de la indemnización por STS Sala 1ª de 31 mayo 2007 (J2007/68123)

Citada en el mismo sentido por STSJ Canarias (sede Santa Cruz) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 26 enero 2007 (J2007/7971)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 2ª de 7 febrero 2007 (J2007/8546)

Citada en el mismo sentido por SAP Cádiz de 3 marzo 2008 (J2008/119283)

Citada en el mismo sentido por SAP Cádiz de 24 marzo 2008 (J2008/119286)

Citada en el mismo sentido por SAP Cádiz de 23 mayo 2008 (J2008/120151)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 3ª de 2 junio 2008 (J2008/124138)

Citada en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - DERECHOS DE LA PERSONALIDAD - Intimidad personal y familiar por STS Sala 3ª de 13 octubre 2008 (J2008/197142)

Citada en el mismo sentido por AAP Sevilla de 1 abril 2008 (J2008/214063)

Citada en el mismo sentido por STSJ Cataluña Sala de lo Contencioso-Administrativo de 15 septiembre 2008 (J2008/240964)

Citada en el mismo sentido por STSJ Andalucía (Mál) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 15 julio 2008 (J2008/242633)

Citada en el mismo sentido por STSJ Andalucía (Sev) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 9 mayo 2008 (J2008/302339)

Citada en el mismo sentido por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 14 noviembre 2008 (J2008/338281)

Citada en el mismo sentido por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 22 diciembre 2008 (J2008/338477)

Citada en el mismo sentido por STSJ Cast-León (Vall) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 29 diciembre 2008 (J2008/365336)

Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 7 febrero 2008 (J2008/376595)

Citada en el mismo sentido por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 18 febrero 2008 (J2008/54389)

Citada en el mismo sentido por SAP Zaragoza de 7 marzo 2008 (J2008/55579)

Citada en el mismo sentido por SJdo. Cont-Advo. de 26 mayo 2008 (J2008/81077)

Citada en el mismo sentido por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 10 marzo 2008 (J2008/88345)

Citada en el mismo sentido por STSJ Navarra Sala de lo Contencioso-Administrativo de 19 mayo 2009 (J2009/111455)

Citada en el mismo sentido por SJdo. Cont-Advo. de 22 mayo 2009 (J2009/141665)

Citada en el mismo sentido por SAP Zaragoza de 14 octubre 2009 (J2009/257804)

Citada en el mismo sentido por SAP Cáceres de 22 octubre 2009 (J2009/266452)

Citada en el mismo sentido por STSJ Cataluña Sala de lo Contencioso-Administrativo de 12 febrero 2009 (J2009/32675)

Citada en el mismo sentido por SAP Tarragona de 2 noviembre 2009 (J2009/326861)

Citada en el mismo sentido por STSJ Canarias (sede Santa Cruz) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 28 julio 2009 (J2009/347596)

Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 15 enero 2009 (J2009/391501)

Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 23 abril 2009 (J2009/397183)

Citada en el mismo sentido por SAP La Coruña de 13 marzo 2009 (J2009/57304)

Citada en el mismo sentido por STSJ Cantabria Sala de lo Contencioso-Administrativo de 1 abril 2009 (J2009/79185)

Citada en el mismo sentido por SAP Málaga de 17 febrero 2009 (J2009/86607)

Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 10 marzo 2010 (J2010/106998)

Citada en el mismo sentido por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 23 abril 2010 (J2010/138026)

Citada en el mismo sentido por SJdo. Cont-Advo. de 8 junio 2010 (J2010/151797)

Citada en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - DERECHOS DE LA PERSONALIDAD - Intimidación personal y familiar por STS Sala 3ª de 20 julio 2010 (J2010/153271)

Citada en el mismo sentido por SAP Vizcaya de 24 marzo 2010 (J2010/256979)

Citada en el mismo sentido por SAP Baleares de 28 octubre 2010 (J2010/280124)

Citada en el mismo sentido por SAP Murcia de 10 diciembre 2010 (J2010/317790)

Citada en el mismo sentido por SAP Toledo de 17 diciembre 2010 (J2010/325930)

Citada en el mismo sentido por STSJ Cataluña Sala de lo Contencioso-Administrativo de 25 noviembre 2010 (J2010/326942)

Citada en el mismo sentido por SAP Tarragona de 21 diciembre 2010 (J2010/359479)

Citada en el mismo sentido por STSJ Extremadura Sala de lo Contencioso-Administrativo de 30 marzo 2010 (J2010/64485)

Citada en el mismo sentido por SAP Zaragoza de 11 febrero 2011 (J2011/126614)

Citada en el mismo sentido por SJdo. Cont-Advo. de 21 enero 2011 (J2011/15534)

Citada en el mismo sentido por STSJ Cast-La Mancha Sala de lo Contencioso-Administrativo de 10 enero 2011 (J2011/18669)

Citada en el mismo sentido por STC Pleno de 29 septiembre 2011 (J2011/226203)

Citada en el mismo sentido por SAP Alicante de 18 julio 2011 (J2011/255784)

Citada en el mismo sentido por STC Sala 2ª de 7 noviembre 2011 (J2011/258868)

Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 20 octubre 2011 (J2011/285694)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 3ª de 7 diciembre 2011 (J2011/292784)

Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 7 octubre 2011 (J2011/314171)

Citada en el mismo sentido por SAP Las Palmas de 14 octubre 2011 (J2011/345456)

Citada en el mismo sentido por SAP Barcelona de 22 diciembre 2011 (J2011/356237)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 3ª de 15 abril 2011 (J2011/51476)

Citada en el mismo sentido por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 28 enero 2011 (J2011/56034)

Citada en el mismo sentido por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 21 enero 2011 (J2011/56041)

Citada en el mismo sentido por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 21 enero 2011 (J2011/56067)

Citada en el mismo sentido por SAP León de 25 marzo 2011 (J2011/70937)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 3ª de 11 octubre 2012 (J2012/225258)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 1ª de 5 marzo 2012 (J2012/36886)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 2ª de 2 marzo 2012 (J2012/37545)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 3ª de 22 marzo 2012 (J2012/50078)

Bibliografía

Comentada en "Problemas generales y aspectos constitucionales de la tutela judicial frente al ruido"

Comentada en "Las inmisiones dañosas en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 31 de mayo de 2007"

Citada en "Derechos a la intimidad y a la propia imagen. Análisis de la doctrina jurisprudencial"
Citada en "Crónica de la Jurisprudencia. Sala 1ª del Tribunal Supremo. 2002-2003"
Citada en "Comentarios a la Ley 37/2003, del Ruido, y al nuevo marco de protección frente a la contaminación acústica"
Citada en "Nuevas orientaciones sobre el domicilio en Propiedad Horizontal"
Citada en "Derecho al silencio: el ruido en una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos"
Citada en "Derecho Penal y contaminación acústica"
Citada en "Crónica de la Jurisprudencia. Sala 2ª del Tribunal Supremo. 2006-2007"
Citada en "La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas por el ruido"
Citada en "El "caso Barajas", la eficacia del derecho a la intimidad domiciliaria frente a la contaminación"
Citada en "El ruido en la jurisprudencia. Respuesta de los tribunales"
Citada en "Estatuto jurídico básico del individuo y urbanismo. Foro abierto"
Citada en "¿Cual es el grado de tolerancia que permite la disposición adicional décima de la Ley del Ruido en materia de inmisiones sonoras? Foro abierto"
Citada en "La protección civil respecto a los excesos del ruido"

Sinópsis *Origen de la demanda:*

A escasos metros de la vivienda de la española Gregoria López Ostra se instaló una estación depuradora de aguas y desechos. La estación comenzó sus actividades en julio de 1988 sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal. El mal funcionamiento de la depuradora originó la producción de emanaciones de gas, olores pestilentes y contaminación que afectaron, principalmente, a los vecinos del barrio donde residía la señora López Ostra. Los habitantes fueron evacuados de sus casas y realojados en el centro del pueblo entre julio y septiembre de 1988. Un mes más tarde, la señora López Ostra y su familia se trasladó de nuevo a su casa, donde vivieron hasta febrero de 1992. En octubre de 1988, la señora López Ostra interpuso ante la Audiencia Territorial de Murcia un recurso de protección de sus derechos fundamentales, por lo que consideraba una injerencia ilegítima en su domicilio y en su disfrute pacífico, así como una violación de derecho a elegir libremente su domicilio y un atentado a su integridad física y moral, su libertad y su seguridad. Solicitaba la paralización, temporal o definitiva, de las actividades de la depuradora. Aún cuando en el informe solicitado a la Agencia para el Medio Ambiente y la Naturaleza de Murcia se manifestaba que el emplazamiento de la estación no era el más adecuado y el Ministerio Fiscal se mostró favorable a las pretensiones de la señora López Ostra, la Audiencia Territorial, por sentencia de 31 de enero de 1989, rechazó el recurso. Consideraba la Audiencia que la depuradora no constituía un peligro grave para la salud de las familias, aunque sí causaba un deterioro de su calidad de vida que no era suficientemente importante para suponer un atentado a los derechos fundamentales reivindicados. Interpuesto el correspondiente recurso ante el Tribunal Supremo, éste lo rechazó en sentencia de julio de ese mismo año, al entender que ningún agente público había penetrado en su domicilio, la señora López Ostra era libre de trasladarse y las actividades de la depuradora no atentaban contra su integridad física. Recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional, éste lo declaró, en febrero de 1990, inadmisibles por falta manifiesta de fundamento.

Procedimiento ante la CEDH:

La señora López Ostra acudió ante la Comisión Europea de Derechos Humanos alegando la vulneración del art. 8, párrafo 1 y del art. 3, estimando que era víctima de una violación de su derecho a respetar su domicilio, haciendo imposible su vida privada y familiar, así como ser sometida a un trato degradante. La Comisión, por unanimidad, concluyó que se había producido la vulneración del art. 8, pero no así la del art. 3. La Comisión remitió el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 8 de diciembre de 1993.

Sobre la objeción preliminar del Gobierno:

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos debió analizar, en primer lugar, la excepción preliminar interpuesta por el Gobierno español en el sentido de no haber agotado las vías internas de recurso. El Tribunal rechaza la excepción al entender que la señora López Ostra hizo uso de los recursos más eficaces y pertinentes para proteger sus derechos, sin que fuera necesario, a su juicio, que hubiera intentado otras vías menos rápidas (por ejemplo, el procedimiento administrativo ordinario contra la falta de licencia municipal). El Gobierno español interpuso, igualmente, la excepción de falta de calidad de víctima. Esta excepción es rechazada, por no fundada, por el Tribunal.

Sobre la violación del art.8:

En relación a la pretendida violación del art. 8 de la Convención, el Tribunal analizó, entre otros extremos, el hecho de si las autoridades nacionales tomaron todas las medidas necesarias para proteger los derechos al respeto del domicilio y la vida privada y familiar de la señora López Ostra. Tras estimar que el municipio no adoptó las medidas oportunas y constatar, incluso, que la actividad de otros órganos del Estado contribuyeron a prolongar la situación, finaliza afirmando que no se mantuvo el justo equilibrio entre el interés económico del municipio de Lorca y los derechos de la señora López Ostra. De todo ello deduce el Tribunal, por unanimidad, que se produjo la vulneración del art. 8 de la Convención.

Sobre el art.3:

En cuanto a la violación alegada del art. 3 del mismo texto, afirma, por unanimidad, el Tribunal que aunque las condiciones en las que vivió la señora López Ostra y su familia fueron ciertamente difíciles, no son constitutivas de un trato degradante en el sentido de la mencionada disposición.

Reparación:

En aplicación del art. 50 de la Convención, el Tribunal establece una cantidad inferior a la solicitada en concepto de daños, al tiempo que asigna una cantidad por gastos y costas.

VERSION OFICIAL EN FRANCÉS

SENTENCIA

En l'affaire López Ostra c. Espagne*,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A**, en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président, R. Bernhardt, A. Spielmann, Mme E. Palm, MM. J.M. Morenilla, F. Bigi, A.B. Baka, M.A. Lopes Rocha, G. Mifsud Bonnici,

ainsi que de M. H. Petzold, greffier f.f.,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 juin et 23 novembre 1994,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

Notes du greffier

* L'affaire porte le n° 41/1993/436/515. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

** Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.

PROCEDURE

1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 décembre 1993, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 16798/90) dirigée contre le Royaume d'Espagne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Gregoria López Ostra, avait saisi la Commission le 14 mai 1990 en vertu de l'article 25 (art. 25).

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration espagnole reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 3 et 8 (art. 3, art. 8) de la Convention.

2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement A, la requérante a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30). Le 10 janvier 1994, le président a autorisé ce dernier à utiliser la langue espagnole dans la procédure (article 27 par. 3).

3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. J.M. Morenilla, juge élu de nationalité espagnole (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement A). Le 24 janvier 1994, ce dernier a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. R. Bernhardt, M. J. De Meyer, Mme E. Palm, M. F. Bigi, M. A.B. Baka, M. M.A. Lopes Rocha et M. G. Mifsud Bonnici, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement A) (art. 43). Par la suite, M. A. Spielmann, juge suppléant, a remplacé M. De Meyer, empêché (articles 22 paras. 1 et 2 et 24 par. 1 du règlement A).

4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement espagnol ("le Gouvernement"), l'avocat de la requérante et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément aux ordonnances rendues en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et de la requérante les 3 et 4 mai 1994 respectivement. Le 16 mai, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait en plaidoirie.

Les 10, 17 et 20 juin 1994, la Commission a fourni divers documents que le greffier avait sollicités sur les instructions du président.

5. Ainsi qu'en avait décidé le président - qui avait aussi autorisé l'agent du Gouvernement à s'exprimer en espagnol à l'audience (article 27 par. 2 du règlement A) -, les débats se sont déroulés en public, le 20 juin 1994, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La chambre avait tenu auparavant une réunion préparatoire.

Ont comparu:

- pour le Gouvernement

M. J. Borrego Borrego, chef du service juridique des droits de l'homme, ministère de la Justice, agent;

- pour la Commission

M. F. Martínez, délégué;

- pour la requérante

Me J.L. Mazón Costa, avocat, conseil.

La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses aux questions de deux de ses membres.

Le 23 novembre 1994, elle a écarté pour tardiveté des observations présentées par le conseil du requérant le 13 octobre 1994 et relatives au remboursement de ses honoraires dans les procédures internes.

EN FAIT

6. De nationalité espagnole, Mme Gregoria López Ostra réside à Lorca (Murcie).

A l'époque considérée, elle habitait avec son époux et leurs deux filles dans le quartier "Diputación del Rio, el Lugarico", situé à quelques centaines de mètres du centre de Lorca.

I. Les circonstances de l'espèce

A. Genèse de l'affaire

7. La ville de Lorca réunit une forte concentration d'industries du cuir. Plusieurs tanneries qui y étaient installées, au sein d'une société anonyme nommée SACURSA, firent construire sur des terrains appartenant à la commune et avec une subvention de l'Etat une station d'épuration d'eaux et de déchets, qui se trouvait à douze mètres du domicile de la requérante.

8. La station démarra ses activités en juillet 1988 sans avoir obtenu au préalable le permis (licencia) de la mairie, comme l'exige l'article 6 du règlement de 1961 relatif aux activités classées gênantes, insalubres, nocives et dangereuses ("le règlement de 1961"), et sans que la procédure établie à cette fin eût été suivie (paragraphe 28 ci-dessous).

Sa mise en marche causa des émanations de gaz, odeurs pestilentielles et contaminations (dues à son mauvais fonctionnement), qui provoquèrent immédiatement des troubles de santé et nuisances à de nombreux habitants de Lorca, notamment à ceux du quartier de la requérante. Le conseil municipal évacua les résidents de ce quartier et les relogea gratuitement au centre ville pendant les mois de juillet, août et septembre 1988. En octobre, la requérante et sa famille regagnèrent leur appartement; ils y habitèrent jusqu'en février 1992 (paragraphe 21 ci-dessous).

9. Le 9 septembre 1988, à la suite de nombreuses plaintes et au vu des rapports des autorités sanitaires et de l'Agence pour l'environnement et la nature (Agencia para el Medio Ambiente y la Naturaleza) de la région de Murcie, le conseil municipal ordonna l'arrêt de l'une des activités de la station, la décantation de résidus chimiques et organiques dans des bassins d'eau (lagunaje), tout en maintenant celle d'épuration des eaux résiduelles souillées au chrome.

Les effets de cet arrêt partiel d'activités sont controversés, mais il ressort des rapports d'expertise et témoignages écrits des années 1991, 1992 et 1993, produits devant la Commission par le Gouvernement et la requérante (paragraphe 18-20 ci-dessous), que certaines nuisances persistent, qui peuvent constituer un danger pour la santé des riverains.

B. Le recours en protection des droits fondamentaux

1. La procédure devant l'Audiencia Territorial de Murcie

10. La tentative pour trouver une solution auprès de la mairie ayant échoué, Mme López Ostra saisit l'Audiencia Territorial (chambre administrative) de Murcie le 13 octobre 1988 d'un recours en protection de ses droits fondamentaux (article 1 de la loi 62/1978 du 26 décembre 1978 sur la protection des droits fondamentaux, "loi 62/1978" - paragraphes 24-25 ci-dessous). Elle se plaignait notamment d'une ingérence illégitime dans son domicile et dans la jouissance pacifique de celui-ci, d'une violation de son droit de choisir librement un domicile et d'atteintes à son intégrité physique et morale, sa liberté et sa sécurité (articles 15, 17 par. 1, 18 par. 2 et 19 de la Constitution - paragraphe 23 ci-dessous), en raison de l'attitude passive de la municipalité face aux nuisances et risques causés par la station d'épuration. Elle demandait à la cour d'ordonner l'arrêt temporaire ou définitif de ses activités.

11. La cour recueillit plusieurs témoignages proposés par la requérante et chargea l'Agence régionale pour l'environnement et la nature de formuler un avis sur les conditions de fonctionnement et la situation de la station. Dans un rapport du 19 janvier 1989, l'agence constata que, lors de la visite de l'expert le 17 janvier, celle-ci avait pour seule activité l'épuration des eaux résiduelles souillées au chrome, mais que le reste des résidus passait aussi par la station à travers des bassins avant d'être rejetés dans la rivière, ce qui provoquait des mauvaises odeurs. Elle concluait donc que l'emplacement de la station n'était pas le plus adéquat.

Le ministère public se montra favorable aux prétentions de l'intéressée. Cependant, l'Audiencia Territorial la débouta le 31 janvier 1989. Selon elle, bien que le fonctionnement de la station pût indéniablement causer des nuisances dues aux odeurs, fumées et bruits, il ne constituait pas un danger grave pour la santé des familles habitant dans les environs, mais plutôt une détérioration de leur qualité de vie, qui n'était pas suffisamment importante pour porter atteinte aux droits fondamentaux revendiqués. En tout cas, on ne pouvait pas l'imputer à la ville, qui avait pris des mesures à cet égard; quant à l'absence de permis, il ne s'agissait pas d'une question à examiner dans le cadre de la procédure spéciale engagée en l'espèce puisqu'elle touchait à la violation de la légalité ordinaire.

2. La procédure devant le Tribunal suprême

12. Mme López Ostra introduisit le 10 février 1989 un appel devant le Tribunal suprême (Tribunal Supremo - paragraphe 25 in fine ci-dessous). Selon elle, divers témoignages et expertises montraient que la station dégageait des fumées polluantes, des odeurs pestilentielles et irritantes ainsi que des bruits répétitifs ayant causé des ennuis de santé à sa fille et à elle-même. En ce qui concernait la responsabilité de la municipalité, la décision de l'Audiencia Territorial paraissait inconciliable avec les pouvoirs généraux de police que le règlement de 1961 attribue aux maires, spécialement quand l'activité en question s'exerce sans permis (paragraphe 28 ci-dessous). Compte tenu, entre autres, de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention, l'attitude de la ville constituait une ingérence illégitime dans son droit au respect du domicile, et en outre une atteinte à son intégrité physique. Enfin, l'intéressée réclamait la suspension des activités de la station.

13. Le 23 février 1989, le procureur près le Tribunal suprême formula ses conclusions: la situation incriminée constituait une ingérence arbitraire et illégale des autorités publiques dans la vie privée et familiale de la requérante (article 18 combiné avec les articles 15 et 19 de la Constitution - paragraphe 23 ci-dessous); il y avait donc lieu de faire droit à sa demande en vue des nuisances qu'elle subissait et de la détérioration de sa qualité de vie, reconnues d'ailleurs par l'arrêt du 31 janvier. Le 13 mars, le procureur appuya la demande de suspension (paragraphe 12 ci-dessus et 25 ci-dessous).

14. Par un arrêt du 27 juillet 1989, le Tribunal suprême rejeta l'appel. La décision attaquée était conforme aux dispositions constitutionnelles invoquées car aucun agent public n'avait pénétré dans le domicile de l'intéressée, qui d'ailleurs était libre de déménager, ni porté atteinte à son intégrité physique. Quant à l'absence de permis, elle devait s'examiner dans le cadre d'une procédure ordinaire.

3. La procédure devant le Tribunal constitutionnel

15. Le 20 octobre 1989, Mme López Ostra saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo alléguant une violation des articles 15 (droit à l'intégrité physique), 18 (droit à la vie privée et à l'inviolabilité du domicile familial) et 19 (droit de choisir librement son domicile) de la Constitution (paragraphe 23 ci-dessous).

Le 26 février 1990, la haute juridiction déclara le recours irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Elle notait que le grief tiré d'une violation du droit au respect de la vie privée, n'avait pas été dûment soulevé devant les tribunaux ordinaires. Pour le reste, elle estimait que l'existence de fumées, odeurs et bruits ne constituait pas en soi une violation du droit à l'inviolabilité du domicile, que le refus d'ordonner la fermeture de la station ne pouvait passer pour un traitement dégradant car la vie et l'intégrité physique de la requérante ne se trouvaient pas en danger, et qu'il n'y avait pas eu atteinte à son droit de choisir un domicile car aucune autorité ne l'avait chassée de sa maison.

C. Les autres procédures concernant la station d'épuration de Lorca

1. La procédure relative à l'absence de permis

16. Deux belles-soeurs de Mme López Ostra, habitant le même immeuble, introduisirent en 1990 devant le Tribunal supérieur (Tribunal Superior de Justicia) (chambre administrative) de Murcie, un recours contre la ville de Lorca et SACURSA, alléguant le fonctionnement illégal de la station. Le 18 septembre 1991, cette juridiction, constatant la persistance des nuisances après le 9 septembre 1988 et l'absence des permis exigés par la loi, ordonna la fermeture provisoire de la station jusqu'à ce que ceux-ci fussent obtenus (paragraphe 28 ci-dessous). Cependant, l'exécution de cet arrêt demeura suspendue à la suite de l'appel de la ville et de SACURSA. L'affaire est encore pendante devant le Tribunal suprême.

2. La plainte pour délit écologique

17. Le 13 novembre 1991, les deux belles-soeurs de la requérante déposèrent plainte, à la suite de quoi le juge d'instruction n° 2 de Lorca entama des poursuites pénales contre SACURSA pour délit écologique (article 347 bis du code pénal - paragraphe 29 ci-dessous). Les deux plaignantes se constituèrent partie civile.

Dès le 15 novembre, le juge décida la fermeture de la station, mais la mesure fut suspendue le 25, en raison du recours présenté par le ministère public le 19 novembre.

18. Le juge ordonna plusieurs expertises sur la gravité des nuisances provoquées par la station d'épuration et sur ses conséquences pour la santé des riverains.

Un premier rapport, daté du 13 octobre 1992 et rédigé par un docteur en sciences chimiques de l'Université de Murcie, conclut à la présence sur les lieux de sulfure d'hydrogène (gaz incolore, soluble dans l'eau, à odeur caractéristique d'oeuf pourri) à des niveaux supérieurs à ceux autorisés. Le déversement d'eaux contenant du sulfure dans un fleuve était jugé inacceptable. Un rapport complémentaire du 25 janvier 1993 confirma ces conclusions.

Un rapport de l'Institut national de toxicologie, du 27 octobre 1992, estima que ce gaz avait des niveaux probablement supérieurs au maximum permis, mais ne constituait pas un risque pour la santé des personnes habitant à proximité. Dans un second rapport, du 10 février 1993, l'institut signala qu'on ne pouvait exclure que l'occupation des logements proches pendant vingt-quatre heures constituât un danger pour la santé, car les calculs portaient seulement sur une durée de huit heures par jour pendant cinq jours.

Enfin l'Agence régionale pour l'environnement et la nature, chargée par la municipalité de Lorca d'effectuer une expertise, conclut dans son rapport du 29 mars 1993 que le niveau de bruit produit par la station en fonctionnement n'était pas supérieur à celui mesuré dans d'autres quartiers de la ville.

19. Quant aux conséquences sur la santé des riverains, le dossier d'instruction contient plusieurs certificats et expertises médico-légales. Dans un certificat du 12 décembre 1991, le docteur de Ayala Sánchez, pédiatre, note que la fille de Mme López Ostra, Cristina, présente un tableau clinique de nausées, vomissements, réactions allergiques, anorexies, etc., qui ne trouvent d'explication que dans le fait de vivre dans une zone hautement polluée. Il recommande l'éloignement de la fillette du site.

De son côté, le rapport d'expertise de l'Institut médico-légal de Cartagène du ministère de la Justice, du 16 avril 1993, relève que le niveau d'émission de gaz dans les maisons proches de la station dépasse le seuil autorisé. Il constate que la fille de la requérante et son neveu, Fernando López Gómez, présentent un état typique d'imprégnation chronique du gaz en question, avec des poussées qui se manifestent sous la forme d'infections broncho-pulmonaires aiguës. Il estime qu'il existe une relation de cause à effet entre ce tableau clinique et le niveau de concentration de gaz.

20. En outre, il ressort des témoignages de trois policiers, appelés à proximité de la station par une belle-soeur de l'intéressée le 9 janvier 1992, que les odeurs se dégageant de ladite station à leur arrivée étaient très fortes et provoquaient des nausées.

21. A partir du 1er février 1992, Mme López Ostra et sa famille furent relogées dans un appartement situé au centre de Lorca, dont le loyer était pris en charge par la municipalité.

En raison des inconvénients liés au changement de domicile et à la précarité de leur logement, la requérante et son mari achetèrent une maison dans un autre quartier de la ville le 23 février 1993.

22. Le 27 octobre 1993, le juge confirma l'ordonnance du 15 novembre 1991 et la station fut fermée provisoirement.

II. Le droit interne pertinent

A. La Constitution

23. Les articles pertinents de la Constitution prévoient:

Article 15

"Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale, sans qu'en aucun cas elle puisse être soumise à la torture ni à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants. La peine de mort est abolie, exception faite des dispositions que pourront prévoir les lois pénales militaires en temps de guerre."

Article 17 par. 1

"Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité. (...)"

Article 18

"1. Le droit à l'honneur, à la vie privée et familiale et à sa propre image est garanti.

2. Le domicile est inviolable. Aucune irruption ou perquisition ne sera autorisée sans le consentement de celui qui y habite ou sans décision judiciaire, hormis en cas de flagrant délit. (...)"

Article 19

"Les Espagnols ont le droit de choisir librement leur résidence et de circuler sur le territoire national (...)"

Article 45

"1. Toute personne a le droit de jouir d'un environnement approprié pour développer sa personnalité et elle a le devoir de le conserver.

2. Les pouvoirs publics veilleront à l'utilisation rationnelle de toutes les ressources naturelles, afin de protéger et améliorer la qualité de la vie et de défendre et restaurer l'environnement, en ayant recours à l'indispensable solidarité collective.

3. Ceux qui violeront les dispositions du paragraphe précédent encourront, dans les termes fixés par la loi, des sanctions pénales ou, s'il y a lieu, des sanctions administratives et ils seront tenus de réparer les dommages causés."

B. La loi de 1978 sur la protection des droits fondamentaux

24. La loi 62/1978 prévoit la protection de certains droits fondamentaux par les juridictions ordinaires. Parmi les droits garantis de cette façon se trouve l'inviolabilité du domicile et la liberté de résidence (article 1 par. 2). Cependant, la disposition transitoire 2 par. 2 de la loi sur le Tribunal constitutionnel du 3 octobre 1979 étend son application aux autres droits reconnus par les articles 14 à 29 de la Constitution (article 53 de la Constitution).

25. Contre les actes de l'administration qui touchent aux droits de l'individu, l'intéressé peut saisir la chambre administrative de la juridiction ordinaire compétente (article 6), sans devoir épuiser auparavant les voies administratives (article 7 par. 1). La procédure suivie a un caractère urgent se traduisant par des délais plus courts et la dispense de certains actes de procédure (articles 8 et 10).

Dans la requête introductive, l'individu peut demander la suspension de l'acte attaqué, qui est décidée selon une procédure sommaire distincte (article 7).

L'arrêt de ladite juridiction peut faire l'objet d'un appel devant le Tribunal suprême (article 9), qui l'examine de façon accélérée.

C. Les règles relatives à la protection de l'environnement

26. La protection de l'environnement fait l'objet de nombreuses dispositions de l'Etat et des communautés autonomes, de différents rangs normatifs: l'article 45 la Constitution (paragraphe 23 ci-dessus); la loi 20/1986 du 14 mai 1986 sur les déchets toxiques et dangereux; le décret législatif royal 1302/1986 du 28 juin 1986 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement; la loi 38/1972 du 22 décembre 1972 sur la protection du milieu atmosphérique.

27. En l'espèce, le texte le plus souvent invoqué est le règlement de 1961 relatif aux activités classées gênantes, insalubres, nocives et dangereuses, approuvé par le décret 2414/1961 du 30 novembre.

Ce dernier vise à éviter que les installations, établissements, activités, industries ou magasins, qu'ils soient publics ou privés, causent des nuisances, altèrent les conditions normales de salubrité et d'hygiène de l'environnement et entraînent des dommages à la richesse publique ou privé ou impliquent des risques graves pour les personnes ou pour les biens (article 1). L'article 3 étend l'application du règlement aux bruits, vibrations, fumées, gaz, odeurs, etc.

En ce qui concerne leur implantation, les activités dont il s'agit obéissent aux ordonnances municipales et plans d'aménagement des sols. En tout cas, les usines considérées comme dangereuses ou insalubres ne peuvent s'installer en principe à moins de 2 000 mètres de la zone d'habitation la plus proche (article 4).

28. Le maire a compétence pour accorder les permis relatifs à l'exercice des activités en question, ainsi que pour contrôler l'application des dispositions précitées et le cas échéant infliger des sanctions (article 6 du règlement).

La procédure pour obtenir lesdits permis comporte plusieurs étapes, y compris la consultation obligatoire d'une commission provinciale sur l'adéquation des systèmes correcteurs proposés par le demandeur dans son descriptif du projet. Avant la mise en marche de l'établissement, un technicien de la commune doit impérativement contrôler les installations (articles 29-34).

Contre les décisions d'octroi ou de refus de permis, les intéressés peuvent introduire un recours devant les juridictions ordinaires (article 42).

Lorsque des nuisances se produisent, le maire peut enjoindre au responsable de celles-ci de prendre des mesures pour les faire disparaître. Faute de leur adoption dans les délais légaux, le maire, au vu des expertises pratiquées et après audition de l'intéressé, peut soit infliger une amende, soit retirer de manière temporaire ou définitive le permis (article 38).

D. Le code pénal

29. L'article 347 bis fut introduit le 25 juin 1983 par la loi de réforme urgente et partielle du code pénal (8/1983). Il prévoit:

"Est passible d'une peine d'emprisonnement d'un à six mois (arresto mayor) et d'une amende de 50 000 à 1 000 000 pesetas, quiconque, enfreignant les lois ou règlements protecteurs de l'environnement, provoque ou pratique, directement ou indirectement, des émissions ou déversements de tout genre dans l'atmosphère, le sol ou les eaux (...), susceptibles de mettre en danger grave la santé des personnes, ou de nuire gravement aux conditions de vie animale, aux forêts, espaces naturels ou plantations utiles.

La peine supérieure (emprisonnement de six mois à six ans) sera prononcée si l'établissement industriel fonctionne clandestinement, sans avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires, ou en contravention avec les décisions expresses de l'administration ordonnant de modifier ou de cesser l'activité polluante, ou s'il a donné des informations mensongères quant à son incidence sur l'environnement ou qu'il a fait obstacle aux activités d'inspection de l'administration.

(...)

Dans tous les cas prévus dans le présent article, la fermeture provisoire ou définitive de l'installation pourra être décidée (...)"

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

30. Mme López Ostra a saisi la Commission le 14 mai 1990. Elle se plaignait de l'inaction de la municipalité de Lorca face aux nuisances causées par une station d'épuration installée à quelques mètres de sa maison; invoquant les articles 8 par. 1 et 3 (art. 8-1, art. 3) de la Convention, elle s'estimait victime d'une violation du droit au respect de son domicile rendant impossible sa vie privée et familiale, ainsi que d'un traitement dégradant.

31. La Commission a retenu la requête (n° 16798/90) le 8 juillet 1992. Dans son rapport du 31 août 1993 (article 31) (art. 31), elle conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8), mais non de l'article 3 (art. 3). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.

* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 303-C de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut s'en procurer copie auprès du greffe.

CONCLUSIONS PRESENTÉES A LA COUR

32. Le Gouvernement a invité la Cour à accueillir ses exceptions préliminaires ou, à défaut, à constater "l'absence de manquement (...) du Royaume d'Espagne aux obligations découlant de la Convention".

33. A l'audience, le conseil de la requérante a prié la Cour "de déclarer que, dans l'affaire López Ostra, l'Etat espagnol n'a pas respecté les obligations que lui imposent les articles 8 et 3 (art. 8, art. 3) de la Convention".

EN DROIT

34. La requérante allègue la violation des articles 8 et 3 (art. 8, art. 3) de la Convention, en raison des odeurs, bruits et fumées polluantes provoqués par une station d'épuration d'eaux et de déchets installée à quelques mètres de son domicile. Elle en impute la responsabilité aux autorités espagnoles, qui auraient fait preuve de passivité.

I. SUR LES EXCEPTIONS PRELIMINAIRES DU GOUVERNEMENT

A. Sur l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes

35. Le Gouvernement soutient, comme déjà devant la Commission, que Mme López Ostra n'a pas épuisé les voies de recours internes. Le recours spécial en protection des droits fondamentaux choisi par elle (paragraphe 10-15 et 24-25 ci-dessus) ne serait pas le moyen adéquat pour soulever des questions de légalité ordinaire et des controverses d'ordre scientifique sur les effets d'une station d'épuration. En effet, il s'agirait d'une procédure abrégée et rapide pour donner une solution à des violations manifestes de droits fondamentaux, et l'administration de preuves s'y trouverait réduite.

En revanche, l'intéressée aurait dû emprunter tant la voie pénale que la voie administrative ordinaire qui avaient démontré leur efficacité dans des circonstances similaires. Ainsi, pour les mêmes faits, ses belles-soeurs ont engagé une procédure ordinaire en avril 1990, puis déposé une plainte pénale le 13 novembre 1991. Les juridictions compétentes ont ordonné la fermeture de la station dès les 18 septembre et 15 novembre 1991 respectivement, mais l'exécution de ces décisions a été suspendue en raison des appels de la ville et du ministère public (paragraphe 16 et 17 ci-dessus). Le 27 octobre 1993, la station a été fermée sur ordonnance du juge pénal, mais les deux procédures sont toujours pendantes devant les tribunaux espagnols. Si la Cour se prononçait dans cette affaire, comme le fait la Commission dans son rapport, sur la base des documents produits par les parties et concernant lesdites procédures, sa décision préjugerait du résultat de celles-ci.

36. La Cour estime au contraire, avec la Commission et la requérante, que le recours spécial en protection des droits fondamentaux dont cette dernière a saisi l'Audiencia Territorial de Murcie (paragraphe 10 ci-dessus) constituait un moyen efficace et rapide de redresser les griefs relatifs aux droits au respect de son domicile et de son intégrité physique. D'autant plus que ledit recours aurait pu produire l'effet voulu par la requérante, c'est-à-dire la fermeture de la station d'épuration. Le ministère public avait d'ailleurs conclu, devant les deux juridictions qui connurent de l'affaire au fond (l'Audiencia Territorial de Murcie et le Tribunal suprême - paragraphes 11 et 13 ci-dessus), qu'il fallait accueillir le recours de l'intéressée.

37. Au sujet de la nécessité d'attendre le dénouement des deux procédures engagées par les belles-soeurs de Mme López Ostra devant les juridictions ordinaires (administrative et pénale), la Cour constate avec la Commission que la requérante n'est pas partie auxdites instances. Au demeurant l'objet de celles-ci ne coïncide pas complètement avec celui du recours en protection des droits fondamentaux, et donc de la requête à Strasbourg, même si elles pourraient aboutir au résultat voulu. En effet, la procédure administrative ordinaire concerne, notamment, une autre question, celle de l'absence d'autorisation municipale pour l'installation et le fonctionnement de la station. De même, le problème de l'éventuelle responsabilité pénale de SACURSA pour un possible délit écologique diffère de celui de l'inactivité de la ville, ou d'autres autorités nationales compétentes, en ce qui concerne les nuisances causées par la station litigieuse.

38. Reste à savoir, enfin, si l'intéressée devait entamer elle-même l'une ou l'autre des deux procédures en question pour épuiser les voies de recours internes. La Cour marque ici à nouveau son accord avec la Commission. La requérante ayant fait usage d'un recours efficace et pertinent par rapport à la violation dont elle se plaint, elle n'était pas obligée d'en intenter également d'autres, moins rapides.

Elle a donc laissé aux juridictions de son pays l'occasion que l'article 26 (art. 26) de la Convention a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants: redresser les manquements allégués à leur encontre (voir, entre autres, les arrêts De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 29, par. 50, et Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 27, par. 72).

39. Il échet donc de rejeter l'exception.

B. Sur l'exception tirée du défaut de la qualité de victime

40. Le Gouvernement soulève une seconde exception déjà présentée à la Commission. Il admet que Mme López Ostra, comme d'ailleurs les autres habitants de Lorca, a subi de graves nuisances provoquées par la station jusqu'au 9 septembre 1988, date de l'arrêt partiel des activités de cette dernière (paragraphe 9 ci-dessus). Cependant, à supposer même que des odeurs ou des bruits - non excessifs - aient pu continuer après cette date, l'intéressée aurait perdu entre-temps la qualité de victime: depuis février 1992, la famille López Ostra a été relogée dans un appartement au centre ville aux frais de la municipalité, puis, en février 1993, elle a emménagé dans une maison achetée par la famille (paragraphe 21 ci-dessus). En tout cas, la fermeture de la station en octobre 1993 aurait mis fin à toute nuisance, de sorte que désormais ni la requérante ni ses proches ne subiraient les prétendus effets indésirables du fonctionnement de ladite station.

41. A l'audience, le délégué de la Commission a fait remarquer que la décision du juge d'instruction du 27 octobre 1993 (paragraphe 22 ci-dessus) ne dépouille pas de la qualité de victime une personne que les conditions de l'environnement ont forcée à abandonner son domicile, puis à acheter une autre maison.

42. La Cour partage cette opinion. Ni le déménagement de Mme López Ostra ni la fermeture - encore provisoire (paragraphe 22 ci-dessus) - de la station d'épuration n'effacent le fait que l'intéressée et les membres de sa famille ont vécu des années durant à douze mètres d'un foyer d'odeurs, bruits et fumées.

Quoi qu'il en soit, si la requérante pouvait maintenant regagner son ancien logement après la décision de clôture, ce serait un élément à retenir pour le calcul du préjudice subi par elle, mais ne lui ôterait pas la qualité de victime (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A n° 31, pp. 13-14, par. 27, et Inze c. Autriche du 28 octobre 1987, série A n° 126, p. 16, par. 32).

43. L'exception se révèle donc non fondée.

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 8 (art. 8) DE LA CONVENTION

44. Mme López Ostra allègue en premier lieu une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi rédigé:

"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."

La Commission partage cette opinion, que le Gouvernement combat.

45. Le Gouvernement fait remarquer que le grief soulevé devant la Commission et retenu par elle (paragraphe 30 et 31 ci-dessus) ne coïncide pas avec celui que les juridictions espagnoles examinèrent dans le cadre du recours en protection des droits fondamentaux, car il se fonderait sur des affirmations, rapports médicaux et expertises techniques postérieurs audit recours et totalement étrangers à ce dernier.

46. Pareil argument n'emporte pas la conviction de la Cour. La requérante critiquait une situation qui s'était prolongée en raison de l'inaction de la municipalité et des autres autorités compétentes. Ladite inaction constituait un des éléments essentiels des griefs présentés à la Commission tout comme du recours devant l'Audiencia Territorial de Murcie (paragraphe 10 ci-dessus). Qu'elle ait persisté après la saisine de la Commission et sa décision sur la recevabilité, ne saurait être retenu contre l'intéressée. La Cour peut tenir compte de faits postérieurs à l'introduction de la requête - et même à l'adoption de la décision sur la recevabilité - lorsqu'il s'agit d'une situation appelée à perdurer (voir, en premier lieu, l'arrêt Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 21, par. 28, et p. 38, par. 7).

47. Mme López Ostra prétend qu'en dépit de l'arrêt partiel des activités de la station le 9 septembre 1988, celle-ci a continué à dégager des fumées, des bruits répétitifs et de fortes odeurs, qui ont rendu insupportable le cadre de vie de sa famille et provoqué chez elle-même et ses proches de sérieux problèmes de santé. Elle allègue à cet égard une violation de son droit au respect de son domicile.

48. Le Gouvernement conteste la réalité et la gravité de la situation décrite (paragraphe 40 ci-dessus).

49. S'appuyant sur des rapports médicaux et d'expertise fournis tantôt par le Gouvernement tantôt par la requérante (paragraphe 18-19 ci-dessus), la Commission a constaté, notamment, que les émanations de sulfure d'hydrogène provenant de la station dépassaient

le seuil autorisé, qu'elles pouvaient entraîner un danger pour la santé des habitants des logements proches et, enfin, qu'il pouvait y avoir un lien de causalité entre lesdites émanations et les affections dont souffrait la fille de la requérante.

50. Selon la Cour, ces constats ne font que confirmer le premier rapport d'expertise soumis le 19 janvier 1989 à l'Audiencia Territorial par l'Agence régionale pour l'environnement et la nature, dans le cadre du recours en protection des droits fondamentaux intenté par Mme López Ostra. Le ministère public soutint ledit recours tant en première qu'en seconde instance (paragraphe 11 et 13 ci-dessus). L'Audiencia Territorial elle-même admit que les nuisances litigieuses, sans constituer un danger grave pour la santé, causaient une détérioration de la qualité de vie des riverains, détérioration qui cependant ne se révélait pas suffisamment sérieuse pour enfreindre les droits fondamentaux reconnus dans la Constitution (paragraphe 11 ci-dessus).

51. Il va pourtant de soi que des atteintes graves à l'environnement peuvent affecter le bien-être d'une personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale, sans pour autant mettre en grave danger la santé de l'intéressée.

Que l'on aborde la question sous l'angle d'une obligation positive de l'Etat - adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits de l'individu en vertu du paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8-1) -, comme le souhaite dans son cas la requérante, ou sous celui d'une "ingérence d'une autorité publique", à justifier selon le paragraphe 2 (art. 8-2), les principes applicables sont assez voisins. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble, l'Etat jouissant en toute hypothèse d'une certaine marge d'appréciation. En outre, même pour les obligations positives résultant du paragraphe 1 (art. 8-1), les objectifs énumérés au paragraphe 2 (art. 8-2) peuvent jouer un certain rôle dans la recherche de l'équilibre voulu (voir, notamment, les arrêts *Rees c. Royaume-Uni* du 17 octobre 1986, série A n° 106, p. 15, par. 37, et *Powell et Rayner c. Royaume-Uni* du 21 février 1990, série A n° 172, p. 18, par. 41).

52. Il ressort du dossier que la station d'épuration litigieuse fut construite en juillet 1988 par SACURSA pour résoudre un grave problème de pollution existant à Lorca à cause de la concentration de tanneries. Or, dès son entrée en service, elle provoqua des nuisances et troubles de santé chez de nombreux habitants (paragraphe 7 et 8 ci-dessus).

Certes, les autorités espagnoles, et notamment la municipalité de Lorca, n'étaient pas en principe directement responsables des émanations dont il s'agit. Toutefois, comme le signale la Commission, la ville permit l'installation de la station sur des terrains lui appartenant et l'Etat octroya une subvention pour sa construction (paragraphe 7 ci-dessus).

53. Le conseil municipal réagit avec célérité en relogant gratuitement au centre ville pendant les mois de juillet, août et septembre 1988 les résidents affectés, puis en closant l'une des activités de la station à partir du 9 septembre (paragraphe 8 et 9 ci-dessus). Cependant, ses membres ne pouvaient ignorer que les problèmes d'environnement persistèrent après cette clôture partielle (paragraphe 9 et 11 ci-dessus). Cela fut d'ailleurs corroboré dès le 19 janvier 1989 par le rapport de l'Agence régionale pour l'environnement et la nature, puis confirmé par des expertises en 1991, 1992 et 1993 (paragraphe 11 et 18 ci-dessus).

54. D'après Mme López Ostra, les pouvoirs généraux de police, attribués à la municipalité par le règlement de 1961, obligeaient ladite municipalité à agir. En outre, la station ne réunissait pas les conditions requises par la loi, notamment en ce qui concernait son emplacement et l'absence de permis municipal (paragraphe 8, 27 et 28 ci-dessus).

55. Sur ce point, la Cour rappelle que la question de la légalité de l'installation et du fonctionnement de la station demeure pendante devant le Tribunal suprême depuis 1991 (paragraphe 16 ci-dessus). Or, d'après sa jurisprudence constante, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et spécialement aux cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (voir, entre autres, l'arrêt *Casado Coca c. Espagne* du 24 février 1994, série A n° 285-A, p. 18, par. 43).

De toute manière, la Cour estime qu'en l'occurrence il lui suffit de rechercher si, à supposer même que la municipalité se soit acquittée des tâches qui lui revenaient d'après le droit interne (paragraphe 27-28 ci-dessus), les autorités nationales ont pris les mesures nécessaires pour protéger le droit de la requérante au respect de son domicile ainsi que de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 (art. 8) (voir entre autres, *mutatis mutandis*, l'arrêt *X et Y c. Pays-Bas* du 26 mars 1985, série A n° 91, p. 11, par. 23).

56. Il échet de constater que non seulement la municipalité n'a pas pris après le 9 septembre 1988 des mesures à cette fin, mais aussi qu'elle a contrecarré des décisions judiciaires allant dans ce sens. Ainsi, dans la procédure ordinaire entamée par les belles-soeurs de Mme López Ostra, elle a interjeté appel contre la décision du Tribunal supérieur de Murcie du 18 septembre 1991 ordonnant la fermeture provisoire de la station, de sorte que cette mesure resta en suspens (paragraphe 16 ci-dessus).

D'autres organes de l'Etat ont aussi contribué à prolonger la situation. Ainsi, le ministère public attaqua, le 19 novembre 1991, la décision de fermeture provisoire prise par le juge d'instruction de Lorca le 15 dans le cadre des poursuites pour délit écologique (paragraphe 17 ci-dessus), si bien que la mesure est restée inexécutée jusqu'au 27 octobre 1993 (paragraphe 22 ci-dessus).

57. Le Gouvernement rappelle que la ville a assumé les frais de location d'un appartement au centre de Lorca, que la requérante et sa famille ont occupé du 1er février 1992 jusqu'en février 1993 (paragraphe 21 ci-dessus).

La Cour note cependant que les intéressés ont dû subir pendant plus de trois ans les nuisances causées par la station, avant de déménager avec les inconvénients que cela comporte. Ils ne l'ont fait que lorsqu'il apparut que la situation pouvait se prolonger indéfiniment et sur prescription du pédiatre de la fille de Mme López Ostra (paragraphe 16, 17 et 19 ci-dessus). Dans ces conditions, l'offre de la municipalité ne pouvait pas effacer complètement les nuisances et inconvénients vécus.

58. Compte tenu de ce qui précède - et malgré la marge d'appréciation reconnue à l'Etat défendeur -, la Cour estime que celui-ci n'a pas su ménager un juste équilibre entre l'intérêt du bien-être économique de la ville de Lorca - celui de disposer d'une station d'épuration - et la jouissance effective par la requérante du droit au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale.

Il y a donc eu violation de l'article 8 (art. 8).

III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 3 (art. 3) DE LA CONVENTION

59. Selon Mme López Ostra, les faits reprochés à l'Etat défendeur revêtent une telle gravité et ont suscité chez elle une telle angoisse qu'ils peuvent raisonnablement passer pour des traitements dégradants prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention, ainsi libellé:

"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."

Gouvernement et Commission considèrent qu'il n'y a pas eu violation de cette disposition.

60. Tel est aussi l'avis de la Cour. Les conditions dans lesquelles la requérante et sa famille vécurent pendant quelques années furent certainement très difficiles, mais elles ne constituent pas un traitement dégradant au sens de l'article 3 (art. 3).

IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION

61. Aux termes de l'article 50 (art. 50),

"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

Mme López Ostra réclame une indemnité pour dommage et le remboursement de frais et dépens.

A. Dommage

62. La requérante affirme que l'installation et le fonctionnement d'une station d'épuration de déchets à côté de son logement l'ont obligée à modifier radicalement son mode de vie. Elle demande en conséquence les sommes suivantes en réparation du dommage subi:

- a) 12 180 000 pesetas pour l'angoisse éprouvée du 1er octobre 1988 au 31 janvier 1992, lorsqu'elle habitait dans son ancien foyer;
- b) 3 000 000 pesetas pour l'anxiété causée par la grave maladie de sa fille;
- c) 2 535 000 pesetas pour les inconvénients provoqués par son déménagement, non désiré, à partir du 1er février 1992;
- d) 7 000 000 pesetas pour le coût de la nouvelle maison qu'elle a été obligée d'acheter en février 1993 en raison de la précarité du logement offert par la municipalité de Lorca;
- e) 295 000 pesetas pour les frais d'installation dans ladite maison.

63. Le Gouvernement trouve ces demandes exagérées. Il fait remarquer que la ville de Lorca a payé le loyer de l'appartement que Mme López Ostra a occupé avec sa famille au centre ville depuis le 1er février 1992 jusqu'à son emménagement dans son nouveau logement.

64. Quant au délégué de la Commission, il estime excessive la somme globale sollicitée. En ce qui concerne le préjudice matériel, il considère que si l'intéressée pouvait en principe réclamer une nouvelle maison, elle devait en échange donner son ancien foyer, toute proportion gardée.

65. La Cour admet que Mme López Ostra a subi un certain dommage en raison de la violation de l'article 8 (art. 8) (paragraphe 58 ci-dessus): la valeur de l'ancien appartement a dû diminuer et l'obligation de déménager a dû entraîner des frais et inconvénients. En revanche, il n'y a pas de raison de lui octroyer le coût de sa nouvelle maison, puisqu'elle conserve son ancien logement. Il faut aussi tenir compte du fait que la municipalité a payé pendant un an le loyer de l'appartement occupé par la requérante et sa famille au centre de Lorca et que la station d'épuration a été fermée provisoirement par le juge d'instruction le 27 octobre 1993 (paragraphe 22 ci-dessus).

D'autre part, l'intéressée a éprouvé un tort moral indéniable; outre les nuisances provoquées par les émanations de gaz, les bruits et les odeurs provenant de l'usine, elle a ressenti de l'angoisse et de l'anxiété en voyant la situation perdurer et l'état de santé de sa fille se dégrader.

Les chefs de dommage retenus ne se prêtent pas à un calcul exact. Statuant en équité comme le veut l'article 50 (art. 50), la Cour alloue 4 000 000 pesetas à Mme López Ostra.

B. Frais et dépens

1. Devant les juridictions internes

66. Pour les frais et dépens devant les juridictions nationales, la requérante réclame une somme totale de 850 000 pesetas.

67. Gouvernement et délégué de la Commission signalent que Mme López Ostra a bénéficié de l'assistance judiciaire gratuite en Espagne, de sorte qu'elle n'est pas tenue de rémunérer son avocat, lequel devrait recevoir de l'Etat le paiement de ses honoraires.

68. La Cour constate elle aussi que l'intéressée n'a pas supporté de frais à cet égard et rejette donc la demande dont il s'agit. Me Mazón Costa ne saurait revendiquer sur la base de l'article 50 (art. 50) une satisfaction équitable pour son propre compte car il a accepté les conditions de l'assistance judiciaire accordée à sa cliente (voir, entre autres, l'arrêt Delta c. France du 19 décembre 1990, série A n° 191-A, p. 18, par. 47).

2. Devant les organes de la Convention

69. Mme López Ostra revendique 2 250 000 pesetas pour les honoraires de son avocat dans la procédure devant la Commission et la Cour, moins les sommes versées par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.

70. Gouvernement et délégué de la Commission estiment ce montant excessif.

71. A la lumière des critères se dégagant de sa jurisprudence, la Cour juge équitable d'accorder de ce chef à la requérante 1 500 000 pesetas, moins les 9 700 francs français payés par le Conseil de l'Europe.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,

1. Rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention;
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention;
4. Dit que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 4 000 000 (quatre millions) pesetas pour dommage et 1 500 000 (un million cinq cent mille) pesetas, moins 9 700 (neuf mille sept cents) francs français, à convertir en pesetas au taux de change applicable à la date du prononcé du présent arrêt, pour frais et dépens;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 9 décembre 1994.

Signé: Rolv RYSSDAL Président

Signé: Herbert PETZOLD Greffier f.f.

VERSION OFICIAL EN INGLÉS

SENTENCIA

In the case of *López Ostra v. Spain**,

The European Court of Human Rights, sitting, in accordance with Article 43 (art. 43) of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ("the Convention") and the relevant provisions of Rules of Court A**, as a Chamber composed of the following judges:

Mr R. Ryssdal, President, Mr R. Bernhardt, Mr A. Spielmann, Mrs E. Palm, Mr J.M. Morenilla, Mr F. Bigi, Mr A.B. Baka, Mr M.A. Lopes Rocha, Mr G. Mifsud Bonnici,

and also of Mr H. Petzold, Acting Registrar,

Having deliberated in private on 24 June and 23 November 1994,

Delivers the following judgment, which was adopted on the last-mentioned date:

Notes by the Registrar

* The case is numbered 41/1993/436/515. The first number is the case's position on the list of cases referred to the Court in the relevant year (second number). The last two numbers indicate the case's position on the list of cases referred to the Court since its creation and on the list of the corresponding originating applications to the Commission.

** Rules A apply to all cases referred to the Court before the entry into force of Protocol No. 9 (P9) and thereafter only to cases concerning States not bound by that Protocol (P9). They correspond to the Rules that came into force on 1 January 1983, as amended several times subsequently.

PROCEDURE

1. The case was referred to the Court by the European Commission of Human Rights ("the Commission") on 8 December 1993, within the three-month period laid down by Article 32 para. 1 and Article 47 (art. 32-1, art. 47) of the Convention. It originated in an application (no. 16798/90) against the Kingdom of Spain lodged with the Commission under Article 25 (art. 25) by a Spanish national, Mrs Gregoria López Ostra, on 14 May 1990.

The Commission's request referred to Articles 44 and 48 (art. 44, art. 48) and to the declaration whereby Spain recognised the compulsory jurisdiction of the Court (Article 46) (art. 46). The object of the request was to obtain a decision as to whether the facts of the case disclosed a breach by the respondent State of its obligations under Articles 3 and 8 (art. 3, art. 8) of the Convention.

2. In response to the enquiry made in accordance with Rule 33 para. 3 (d) of Rules of Court A, the applicant stated that she wished to take part in the proceedings and designated the lawyer who would represent her (Rule 30). On 10 January 1994 the lawyer was given leave by the President to use the Spanish language in the proceedings (Rule 27 para. 3).

3. The Chamber to be constituted included ex officio Mr J.M. Morenilla, the elected judge of Spanish nationality (Article 43 of the Convention) (art. 43), and Mr R. Ryssdal, the President of the Court (Rule 21 para. 3 (b)). On 24 January 1994, in the presence of the Registrar, the President drew by lot the names of the other seven members, namely Mr R. Bernhardt, Mr J. De Meyer, Mrs E. Palm, Mr F. Bigi, Mr A.B. Baka, Mr M.A. Lopes Rocha and Mr G. Mifsud Bonnici (Article 43 in fine of the Convention and Rule 21 para. 4) (art. 43). Subsequently Mr A. Spielmann, substitute judge, replaced Mr De Meyer, who was unable to take part in the further consideration of the case (Rule 22 paras. 1 and 2 and Rule 24 para. 1).

4. As President of the Chamber (Rule 21 para. 5), Mr Ryssdal, acting through the Registrar, consulted the Agent of the Spanish Government ("the Government"), the applicant's lawyer and the Delegate of the Commission on the organisation of the proceedings (Rules 37 para. 1 and 38). Pursuant to the orders made in consequence, the Registrar received the Government's and the applicant's memorials on 3 and 4 May 1994 respectively. On 16 May the Secretary to the Commission informed the Registrar that the Delegate would submit his observations at the hearing.

On 10, 17 and 20 June 1994 the Commission supplied various documents which the Registrar had requested on the President's instructions.

5. In accordance with the decision of the President, who had also given the Agent of the Government leave to address the Court in Spanish (Rule 27 para. 2), the hearing took place in public in the Human Rights Building, Strasbourg, on 20 June 1994. The Court had held a preparatory meeting beforehand.

There appeared before the Court:

(a) for the Government

Mr J. Borrego Borrego, Head of the Legal Department for Human Rights, Ministry of Justice, Agent;

(b) for the Commission

Mr F. Martínez, Delegate;

(c) for the applicant

Mr J.L. Mazón Costa, abogado, Counsel.

The Court heard addresses by them and also their replies to questions from two of its members.

On 23 November 1994 it declined to accept observations submitted out of time by counsel for the applicant on 13 October 1994 which related to the reimbursement of his fees in the national proceedings.

AS TO THE FACTS

6. Mrs Gregoria López Ostra, a Spanish national, lives in Lorca (Murcia).

At the material time she and her husband and their two daughters had their home in the district of "Diputación del Río, el Lugarico", a few hundred metres from the town centre.

I. The circumstances of the case

A. Background to the case

7. The town of Lorca has a heavy concentration of leather industries. Several tanneries there, all belonging to a limited company called SACURSA, had a plant for the treatment of liquid and solid waste built with a State subsidy on municipal land twelve metres away from the applicant's home.

8. The plant began to operate in July 1988 without the licence (licencia) from the municipal authorities required by Regulation 6 of the 1961 regulations on activities classified as causing nuisance and being unhealthy, noxious and dangerous ("the 1961 regulations"), and without having followed the procedure for obtaining such a licence (see paragraph 28 below).

Owing to a malfunction, its start-up released gas fumes, pestilential smells and contamination, which immediately caused health problems and nuisance to many Lorca people, particularly those living in the applicant's district. The town council evacuated the local residents and rehoused them free of charge in the town centre for the months of July, August and September 1988. In October the applicant and her family returned to their flat and lived there until February 1992 (see paragraph 21 below).

9. On 9 September 1988, following numerous complaints and in the light of reports from the health authorities and the Environment and Nature Agency (Agencia para el Medio Ambiente y la Naturaleza) for the Murcia region, the town council ordered cessation of one of the plant's activities - the settling of chemical and organic residues in water tanks (lagunaje) - while permitting the treatment of waste water contaminated with chromium to continue.

There is disagreement as to what the effects were of this partial shutdown, but it can be seen from the expert opinions and written evidence of 1991, 1992 and 1993, produced before the Commission by the Government and the applicant (see paragraphs 18-20 below), that certain nuisances continue and may endanger the health of those living nearby.

B. The application for protection of fundamental rights

1. Proceedings in the Murcia Audiencia Territorial

10. Having attempted in vain to get the municipal authority to find a solution, Mrs López Ostra lodged an application on 13 October 1988 with the Administrative Division of the Murcia Audiencia Territorial, seeking protection of her fundamental rights (section 1 of Law 62/1978 of 26 December 1978 on the protection of fundamental rights ("Law 62/1978") - see paragraphs 24-25 below). She complained, inter alia, of an unlawful interference with her home and her peaceful enjoyment of it, a violation of her right to choose freely her place of residence, attacks on her physical and psychological integrity, and infringements of her liberty and her safety (Articles 15, 17 para. 1, 18 para. 2 and 19 of the Constitution - see paragraph 23 below) on account of the municipal authorities' passive attitude to the nuisance and risks caused by the waste-treatment plant. She requested the court to order temporary or permanent cessation of its activities.

11. The court took evidence from several witnesses offered by the applicant and instructed the regional Environment and Nature Agency to give an opinion on the plant's operating conditions and location. In a report of 19 January 1989 the agency noted that at the time of its expert's visit on 17 January the plant's sole activity was the treatment of waste water contaminated with chromium, but that the remaining waste also flowed through its tanks before being discharged into the river, generating foul smells. It therefore concluded that the plant had not been built in the most suitable location.

Crown Counsel endorsed Mrs López Ostra's application. However, the Audiencia Territorial found against her on 31 January 1989. It held that although the plant's operation could unquestionably cause nuisance because of the smells, fumes and noise, it did not constitute a serious risk to the health of the families living in its vicinity but, rather, impaired their quality of life, though not enough to infringe the fundamental rights claimed. In any case, the municipal authorities, who had taken measures in respect of the plant, could not be held

liable. The non-possession of a licence was not an issue to be examined in the special proceedings instituted in this instance, because it concerned a breach of the ordinary law.

2. Proceedings in the Supreme Court

12. On 10 February 1989 Mrs López Ostra lodged an appeal with the Supreme Court (Tribunal Supremo - see paragraph 25 below in fine). She maintained that a number of witnesses and experts had indicated that the plant was a source of polluting fumes, pestilential and irritant smells and repetitive noise that had caused both her daughter and herself health problems. As regards the municipal authorities' liability, the decision of the Audiencia Territorial appeared to be incompatible with the general supervisory powers conferred on mayors by the 1961 regulations, especially where the activity in question was carried on without a licence (see paragraph 28 below). Regard being had to Article 8 para. 1 (art. 8-1) of the Convention, inter alia, the town council's attitude amounted to unlawful interference with her right to respect for her home and was also an attack on her physical integrity. Lastly, the applicant sought an order suspending the plant's operations.

13. On 23 February 1989 Crown Counsel at the Supreme Court filed pleadings to the effect that the situation complained of amounted to arbitrary and unlawful interference by the public authorities with the applicant's private and family life (Article 18 of the Constitution taken together with Articles 15 and 19 - see paragraph 23 below). The court should accordingly grant her application in view of the nuisance to which she was subjected and the deterioration in the quality of her life, both of which had moreover been acknowledged in the judgment of 31 January. On 13 March Crown Counsel supported the suspension application (see paragraph 12 above and paragraph 25 below).

14. In a judgment of 27 July 1989 the Supreme Court dismissed the appeal. The impugned decision had been consistent with the constitutional provisions relied on, as no public official had entered the applicant's home or attacked her physical integrity. She was in any case free to move elsewhere. The failure to obtain a licence could only be considered in ordinary-law proceedings.

3. Proceedings in the Constitutional Court

15. On 20 October 1989 Mrs López Ostra lodged an appeal (recurso de amparo) with the Constitutional Court, alleging violations of Article 15 (right to physical integrity), Article 18 (right to private life and to inviolability of the family home) and Article 19 (right to choose freely a place of residence) of the Constitution (see paragraph 23 below).

On 26 February 1990 the court ruled that the appeal was inadmissible on the ground that it was manifestly ill-founded. It observed that the complaint based on a violation of the right to respect for private life had not been raised in the ordinary courts as it should have been. For the rest, it held that the presence of fumes, smells and noise did not itself amount to a breach of the right to inviolability of the home; that the refusal to order closure of the plant could not be regarded as degrading treatment, since the applicant's life and physical integrity had not been endangered; and that her right to choose her place of residence had not been infringed as she had not been expelled from her home by any authority.

C. Other proceedings concerning the Lorca waste-treatment plant

1. The proceedings relating to non-possession of a licence

16. In 1990 two sisters-in-law of Mrs López Ostra, who lived in the same building as her, brought proceedings against the municipality of Lorca and SACURSA in the Administrative Division of the Murcia High Court (Tribunal Superior de Justicia), alleging that the plant was operating unlawfully. On 18 September 1991 the court, noting that the nuisance had continued after 9 September 1988 and that the plant did not have the licences required by law, ordered that it should be closed until they were obtained (see paragraph 28 below). However, enforcement of this order was stayed following an appeal by the town council and SACURSA. The case is still pending in the Supreme Court.

2. Complaint of an environmental health offence

17. On 13 November 1991 the applicant's two sisters-in-law lodged a complaint, as a result of which Lorca investigating judge no. 2 instituted criminal proceedings against SACURSA for an environmental health offence (Article 347 bis of the Criminal Code - see paragraph 29 below). The two complainants joined the proceedings as civil parties.

Only two days later, the judge decided to close the plant, but on 25 November the measure was suspended because of an appeal lodged by Crown Counsel on 19 November.

18. The judge ordered a number of expert opinions as to the seriousness of the nuisance caused by the waste-treatment plant and its effects on the health of those living nearby.

An initial report of 13 October 1992 by a scientist from the University of Murcia who had a doctorate in chemistry stated that hydrogen sulphide (a colourless gas, soluble in water, with a characteristic rotten-egg smell) had been detected on the site in concentrations exceeding the permitted levels. The discharge of effluent containing sulphur into a river was said to be unacceptable. These findings were confirmed in a supplementary report of 25 January 1993.

In a report of 27 October 1992 the National Toxicology Institute stated that the levels of the gas probably exceeded the permitted limits but did not pose any danger to the health of people living close to the plant. In a second report of 10 February 1993 the institute stated that it could not be ruled out that being in neighbouring houses twenty-four hours a day constituted a health risk as calculations had been based only on a period of eight hours a day for five days.

Lastly, the regional Environment and Nature Agency, which had been asked to submit an expert opinion by the Lorca municipal authorities, concluded in a report of 29 March 1993 that the level of noise produced by the plant when in operation did not exceed that measured in other parts of the town.

19. The investigation file contains several medical certificates and expert opinions concerning the effects on the health of those living near the plant. In a certificate dated 12 December 1991 Dr de Ayala Sánchez, a paediatrician, stated that Mrs López Ostra's daughter, Cristina, presented a clinical picture of nausea, vomiting, allergic reactions, anorexia, etc., which could only be explained by the fact that she was living in a highly polluted area. He recommended that the child should be moved from the area.

In an expert report of 16 April 1993 the Ministry of Justice's Institute of Forensic Medicine in Cartagena indicated that gas concentrations in houses near the plant exceeded the permitted limit. It noted that the applicant's daughter and her nephew, Fernando López Gómez, presented typical symptoms of chronic absorption of the gas in question, periodically manifested in the form of acute bronchopulmonary infections. It considered that there was a relationship of cause and effect between this clinical picture and the levels of gas.

20. In addition, it is apparent from the statements of three police officers called to the neighbourhood of the plant by one of the applicant's sisters-in-law on 9 January 1992 that the smells given off were, at the time of their arrival, very strong and induced nausea.

21. On 1 February 1992 Mrs López Ostra and her family were rehoused in a flat in the centre of Lorca, for which the municipality paid the rent.

The inconvenience resulting from this move and from the precariousness of their housing situation prompted the applicant and her husband to purchase a house in a different part of town on 23 February 1993.

22. On 27 October 1993 the judge confirmed the order of 15 November 1991 and the plant was temporarily closed.

II. Relevant domestic law

A. The Constitution

23. The relevant Articles of the Constitution provide:

Article 15

"Everyone shall have the right to life and to physical and psychological integrity, without being subjected to torture or inhuman or degrading punishment or treatment under any circumstances. The death penalty shall be abolished except where it is provided for by military criminal law in time of war."

Article 17 para. 1

"Everyone has the right to liberty and security...."

Article 18

"1. The right to honour and to private and family life and the right to control use of one's likeness shall be protected.

2. The home shall be inviolable. It may not be entered or searched without the consent of the person who lives there or a judicial decision, except in cases of flagrant offences...."

Article 19

"Spanish citizens shall have the right to choose freely their place of residence and to move around the national territory..."

Article 45

"1. Everyone shall have the right to enjoy an environment suitable for personal development and the duty to preserve it.

2. The public authorities, relying on the necessary public solidarity, shall ensure that all natural resources are used rationally, with a view to safeguarding and improving the quality of life and protecting and restoring the environment.

3. Anyone who infringes the above provisions shall be liable to criminal or, where applicable, administrative penalties as prescribed by law and shall be required to make good any damage caused."

B. The 1978 Law on the protection of fundamental rights

24. Law 62/1978 provides that certain fundamental rights shall be safeguarded by the ordinary courts. The rights protected in this way include inviolability of the home and freedom to choose one's place of residence (section 1(2)). However, under transitional provision 2(2) of the Law on the Constitutional Court of 3 October 1979, its application is extended to the other rights secured in Articles 14 to 29 of the Constitution (Article 53 of the Constitution).

25. Complaints against decisions of administrative authorities affecting the rights of the individual may be lodged with the administrative division of the appropriate ordinary court (section 6), without its first being necessary to exhaust the administrative remedies (section 7(1)). The procedure followed is an expedited one with shorter time-limits and exemption from certain procedural steps (sections 8 and 10).

In the writ the individual may apply to have the impugned decision stayed, and the court rules on such applications by means of a separate, summary procedure (section 7).

An appeal lies to the Supreme Court (section 9), which hears such appeals in expedited proceedings.

C. Environmental protection provisions

26. In the field of environmental protection the State and the autonomous communities have enacted many provisions of different ranks in law: Article 45 of the Constitution (see paragraph 23 above); Law 20/1986 of 14 May 1986 on toxic and dangerous waste; Royal Legislative Decree 1302/1986 of 28 June 1986 on environmental impact assessment and Law 38/1972 of 22 December 1972 on atmospheric pollution control.

27. The provisions most frequently relied on in the instant case are the 1961 regulations on activities classified as causing nuisance and being unhealthy, noxious and dangerous approved in Decree 2414/1961 of 30 November.

The purpose of this decree is to prevent plant, factories, activities, industries or warehouses, whether public or private, from causing nuisance, impairing normal environmental health and hygiene or damaging public or private property or entailing serious risks to persons or property (Regulation 1). Regulation 3 extends the scope of the regulations to cover noise, vibrations, fumes, gases, smells, etc.

Siting of the activities in question is governed by municipal by-laws and local development plans. At all events, factories deemed to be dangerous or unhealthy cannot in principle be built less than 2,000 metres from the nearest housing (Regulation 4).

28. The local mayor is empowered to issue licences for carrying on these activities, to supervise the application of the aforementioned provisions and to impose penalties where necessary (Regulation 6).

The procedure for obtaining such licences has several stages, including mandatory consultation of a provincial committee as to the suitability of the safety systems proposed by the applicant in his description of the project. Before the premises are brought into use they must undergo a compulsory inspection by a local-authority technician (Regulations 29-34).

An appeal lies to the ordinary courts against decisions to grant or refuse licences (Regulation 42).

When a nuisance occurs, the mayor may order the party responsible for it to take steps to eliminate it. If these are not taken within the time specified in the regulations, the mayor may, in the light of the expert opinions obtained and after hearing the person concerned, either impose a fine or temporarily or permanently withdraw the licence (Regulation 38).

D. The Criminal Code

29. Article 347 bis was added on 25 June 1983 by the Law making urgent reforms to part of the Criminal Code (8/1983). It provides:

"Anyone who, in breach of environmental protection legislation or regulations, causes to be released or directly or indirectly releases into the atmosphere, the soil or... waters emissions or discharges of any kind that are likely seriously to endanger human health or seriously to interfere with the conditions of animal life, forests, natural sites or cultivated areas, shall be liable to a sentence of between one and six months' imprisonment (arresto mayor) and a fine of 50,000 to 1,000,000 pesetas.

A more severe penalty (six months' to six years' imprisonment) shall be imposed where an industrial plant is operating illegally, without having obtained the necessary administrative authorisations, or where express orders of the administrative authorities requiring modification or cessation of the polluting activities have not been complied with or where untrue information has been given about the activities' environmental impact, or where an inspection by the administrative authorities has been obstructed.

...

In all the cases referred to in this Article, temporary or permanent closure of the establishment may be ordered..."

PROCEEDINGS BEFORE THE COMMISSION

30. Mrs López Ostra applied to the Commission on 14 May 1990. She complained of the Lorca municipal authorities' inactivity in respect of the nuisance caused by a waste-treatment plant situated a few metres away from her home. Relying on Articles 8 para. 1 and 3 (art. 8-1, art. 3) of the Convention, she asserted that she was the victim of a violation of the right to respect for her home that made her private and family life impossible and the victim also of degrading treatment.

31. On 8 July 1992 the Commission declared the application (no. 16798/90) admissible. In its report of 31 August 1993 (Article 31) (art. 31), it expressed the unanimous opinion that there had been a violation of Article 8 (art. 8) but not of Article 3 (art. 3). The full text of the Commission's opinion is reproduced as an annex to this judgment*.

* Note by the Registrar. For practical reasons this annex will appear only with the printed version of the judgment (volume 303-C of Series A of the Publications of the Court), but a copy of the Commission's report is obtainable from the registry.

FINAL SUBMISSIONS TO THE COURT

32. The Government requested the Court to allow their preliminary objections or, failing this, to find that the Kingdom of Spain had not breached its obligations under the Convention.

33. At the hearing the applicant's lawyer requested the Court to rule that in the instant case Spain had not fulfilled its obligations under Articles 8 and 3 (art. 8, art. 3) of the Convention.

AS TO THE LAW

34. The applicant alleged that there had been a violation of Articles 8 and 3 (art. 8, art. 3) of the Convention on account of the smells, noise and polluting fumes caused by a plant for the treatment of liquid and solid waste sited a few metres away from her home. She held the Spanish authorities responsible, alleging that they had adopted a passive attitude.

I. THE GOVERNMENT'S PRELIMINARY OBJECTIONS

A. The objection based on failure to exhaust domestic remedies

35. The Government contended, as they had done before the Commission, that Mrs López Ostra had not exhausted domestic remedies. The special application for protection of fundamental rights she had chosen to make (see paragraphs 10-15 and 24-25 above) was not the appropriate means of raising questions of compliance with the ordinary law or disputes of a scientific nature over the effects of a waste-treatment plant. This procedure was a shortened, rapid one intended to remedy overt infringements of fundamental rights, and the taking of evidence under it was curtailed.

The applicant should, on the other hand, have instituted both criminal proceedings and ordinary administrative proceedings, which had proved to be effective under similar circumstances. In respect of the same facts, for instance, her sisters-in-law had brought ordinary administrative proceedings in April 1990 and had then lodged a criminal complaint on 13 November 1991. The relevant judicial authorities had ordered closure of the plant on 18 September and 15 November 1991 respectively, but enforcement of those orders had been stayed on account of appeals lodged by the municipal authorities and Crown Counsel (see paragraphs 16 and 17 above). On 27 October 1993 the plant had been closed by order of the judge in the criminal proceedings but both sets of proceedings were still pending in the Spanish courts. If the Court determined the present case on the basis of the documents produced by the parties relating to those proceedings, as the Commission did in its report, its decision would prejudice their outcome.

36. Like the Commission and the applicant, the Court considers that on the contrary the special application for protection of fundamental rights lodged by the applicant with the Murcia Audiencia Territorial (see paragraph 10 above) was an effective, rapid means of obtaining redress in the case of her complaints relating to her right to respect for her home and for her physical integrity, especially since that application could have had the outcome she desired, namely closure of the waste-treatment plant. Moreover, in both courts that dealt with the merits of the case (the Murcia Audiencia Territorial and the Supreme Court - see paragraphs 11 and 13 above) Crown Counsel had submitted that the application should be allowed.

37. As to the need to wait for the outcome of the two sets of proceedings brought by Mrs López Ostra's sisters-in-law in the ordinary (administrative and criminal) courts, the Court notes, like the Commission, that the applicant is not a party to those proceedings. Their subject-matter is, moreover, not exactly the same as that of the application for protection of fundamental rights, and thus of the application to Strasbourg, even if they might have the desired result. The ordinary administrative proceedings relate in particular to another question, the failure to obtain the municipal authorities' permission to build and operate the plant. The issue of whether SACURSA might be criminally liable for any environmental health offence is likewise different from that of the town's or other competent national authorities' inaction with regard to the nuisance caused by the plant.

38. Lastly, it remains to be determined whether, in order to exhaust domestic remedies, it was necessary for the applicant herself to institute either of the two types of proceedings in question. Here too the Court agrees with the Commission. Having had recourse to a remedy that was effective and appropriate in relation to the infringement of which she had complained, the applicant was under no obligation also to bring other proceedings that were slower.

The applicant therefore provided the national courts with the opportunity which is in principle intended to be afforded to Contracting States by Article 26 (art. 26) of the Convention, namely the opportunity of putting right the violations alleged against them (see, *inter alia*, the *De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium* judgment of 18 June 1971, Series A no. 12, p. 29, para. 50, and the *Guzzardi v. Italy* judgment of 6 November 1980, Series A no. 39, p. 27, para. 72).

39. It follows that the objection must be dismissed.

B. The objection that the applicant was not a victim

40. The Government raised a second objection already advanced before the Commission. They acknowledged that Mrs López Ostra - like, for that matter, the other residents of Lorca - had been caused serious nuisance by the plant until 9 September 1988, when part of its activities ceased (see paragraph 9 above). However, even supposing that smells or noise - which would not have been excessive - had continued after that date, the applicant had in the meantime ceased to be a victim. From February 1992 the López Ostra family were rehoused in a flat in the town centre at the municipality's expense, and in February 1993 they moved into a house they had purchased (see paragraph 21 above). In any case, the closure of the plant in October 1993 brought all nuisance to an end, with the result that neither the applicant nor her family now suffered the alleged undesirable effects of its operation.

41. At the hearing the Delegate of the Commission pointed out that the investigating judge's decision of 27 October 1993 (see paragraph 22 above) did not mean that someone who had been forced by environmental conditions to abandon her home and subsequently to buy another house had ceased to be a victim.

42. The Court shares this opinion. Neither Mrs López Ostra's move nor the waste-treatment plant's closure, which was moreover temporary (see paragraph 22 above), alters the fact that the applicant and her family lived for years only twelve metres away from a source of smells, noise and fumes.

At all events, if the applicant could now return to her former home following the decision to close the plant, this would be a factor to be taken into account in assessing the damage she sustained but would not mean that she ceased to be a victim (see, among many other authorities, the *Marckx v. Belgium* judgment of 13 June 1979, Series A no. 31, pp. 13-14, para. 27, and the *Inze v. Austria* judgment of 28 October 1987, Series A no. 126, p. 16, para. 32).

43. The objection is therefore unfounded.

II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 8 (art. 8) OF THE CONVENTION

44. Mrs López Ostra first contended that there had been a violation of Article 8 (art. 8) of the Convention, which provides:

"1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.

2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others."

The Commission subscribed to this view, while the Government contested it.

45. The Government said that the complaint made to the Commission and declared admissible by it (see paragraphs 30 and 31 above) was not the same as the one that the Spanish courts had considered in the application for protection of fundamental rights since it appeared to be based on statements, medical reports and technical experts' opinions of later date than that application and wholly unconnected with it.

46. This argument does not persuade the Court. The applicant had complained of a situation which had been prolonged by the municipality's and the relevant authorities' failure to act. This inaction was one of the fundamental points both in the complaints made to the Commission and in the application to the Murcia Audiencia Territorial (see paragraph 10 above). The fact that it continued after the application to the Commission and the decision on admissibility cannot be held against the applicant. Where a situation under consideration is a persisting one, the Court may take into account facts occurring after the application has been lodged and even after the decision on admissibility has been adopted (see, as the earliest authority, the *Neumeister v. Austria* judgment of 27 June 1968, Series A no. 8, p. 21, para. 28, and p. 38, para. 7).

47. Mrs López Ostra maintained that, despite its partial shutdown on 9 September 1988, the plant continued to emit fumes, repetitive noise and strong smells, which made her family's living conditions unbearable and caused both her and them serious health problems. She alleged in this connection that her right to respect for her home had been infringed.

48. The Government disputed that the situation was really as described and as serious (see paragraph 40 above).

49. On the basis of medical reports and expert opinions produced by the Government or the applicant (see paragraphs 18-19 above), the Commission noted, *inter alia*, that hydrogen sulphide emissions from the plant exceeded the permitted limit and could endanger the health of those living nearby and that there could be a causal link between those emissions and the applicant's daughter's ailments.

50. In the Court's opinion, these findings merely confirm the first expert report submitted to the Audiencia Territorial on 19 January 1989 by the regional Environment and Nature Agency in connection with Mrs López Ostra's application for protection of fundamental rights. Crown Counsel supported this application both at first instance and on appeal (see paragraphs 11 and 13 above). The Audiencia Territorial itself accepted that, without constituting a grave health risk, the nuisances in issue impaired the quality of life of those living in the plant's vicinity, but it held that this impairment was not serious enough to infringe the fundamental rights recognised in the Constitution (see paragraph 11 above).

51. Naturally, severe environmental pollution may affect individuals' well-being and prevent them from enjoying their homes in such a way as to affect their private and family life adversely, without, however, seriously endangering their health.

Whether the question is analysed in terms of a positive duty on the State - to take reasonable and appropriate measures to secure the applicant's rights under paragraph 1 of Article 8 (art. 8-1) -, as the applicant wishes in her case, or in terms of an "interference by a public authority" to be justified in accordance with paragraph 2 (art. 8-2), the applicable principles are broadly similar. In both contexts regard must be had to the fair balance that has to be struck between the competing interests of the individual and of the community as a whole, and in any case the State enjoys a certain margin of appreciation. Furthermore, even in relation to the positive obligations flowing from the first paragraph of Article 8 (art. 8-1), in striking the required balance the aims mentioned in the second paragraph (art. 8-2) may be of a certain relevance (see, in particular, the *Rees v. the United Kingdom* judgment of 17 October 1986, Series A no. 106, p. 15, para. 37, and the *Powell and Rayner v. the United Kingdom* judgment of 21 February 1990, Series A no. 172, p. 18, para. 41).

52. It appears from the evidence that the waste-treatment plant in issue was built by SACURSA in July 1988 to solve a serious pollution problem in Lorca due to the concentration of tanneries. Yet as soon as it started up, the plant caused nuisance and health problems to many local people (see paragraphs 7 and 8 above).

Admittedly, the Spanish authorities, and in particular the Lorca municipality, were theoretically not directly responsible for the emissions in question. However, as the Commission pointed out, the town allowed the plant to be built on its land and the State subsidised the plant's construction (see paragraph 7 above).

53. The town council reacted promptly by rehousing the residents affected, free of charge, in the town centre for the months of July, August and September 1988 and then by stopping one of the plant's activities from 9 September (see paragraphs 8 and 9 above). However, the council's members could not be unaware that the environmental problems continued after this partial shutdown (see paragraphs 9 and 11 above). This was, moreover, confirmed as early as 19 January 1989 by the regional Environment and Nature Agency's report and then by expert opinions in 1991, 1992 and 1993 (see paragraphs 11 and 18 above).

54. Mrs López Ostra submitted that by virtue of the general supervisory powers conferred on the municipality by the 1961 regulations the municipality had a duty to act. In addition, the plant did not satisfy the legal requirements, in particular as regards its location and the failure to obtain a municipal licence (see paragraphs 8, 27 and 28 above).

55. On this issue the Court points out that the question of the lawfulness of the building and operation of the plant has been pending in the Supreme Court since 1991 (see paragraph 16 above). The Court has consistently held that it is primarily for the national authorities, notably the courts, to interpret and apply domestic law (see, *inter alia*, the *Casado Coca v. Spain* judgment of 24 February 1994, Series A no. 285-A, p. 18, para. 43).

At all events, the Court considers that in the present case, even supposing that the municipality did fulfil the functions assigned to it by domestic law (see paragraphs 27 and 28 above), it need only establish whether the national authorities took the measures necessary for protecting the applicant's right to respect for her home and for her private and family life under Article 8 (art. 8) (see, among other authorities and *mutatis mutandis*, the *X and Y v. the Netherlands* judgment of 26 March 1985, Series A no. 91, p. 11, para. 23).

56. It has to be noted that the municipality not only failed to take steps to that end after 9 September 1988 but also resisted judicial decisions to that effect. In the ordinary administrative proceedings instituted by Mrs López Ostra's sisters-in-law it appealed against

the Murcia High Court's decision of 18 September 1991 ordering temporary closure of the plant, and that measure was suspended as a result (see paragraph 16 above).

Other State authorities also contributed to prolonging the situation. On 19 November 1991 Crown Counsel appealed against the Lorca investigating judge's decision of 15 November temporarily to close the plant in the prosecution for an environmental health offence (see paragraph 17 above), with the result that the order was not enforced until 27 October 1993 (see paragraph 22 above).

57. The Government drew attention to the fact that the town had borne the expense of renting a flat in the centre of Lorca, in which the applicant and her family lived from 1 February 1992 to February 1993 (see paragraph 21 above).

The Court notes, however, that the family had to bear the nuisance caused by the plant for over three years before moving house with all the attendant inconveniences. They moved only when it became apparent that the situation could continue indefinitely and when Mrs López Ostra's daughter's paediatrician recommended that they do so (see paragraphs 16, 17 and 19 above). Under these circumstances, the municipality's offer could not afford complete redress for the nuisance and inconveniences to which they had been subjected.

58. Having regard to the foregoing, and despite the margin of appreciation left to the respondent State, the Court considers that the State did not succeed in striking a fair balance between the interest of the town's economic well-being - that of having a waste-treatment plant - and the applicant's effective enjoyment of her right to respect for her home and her private and family life.

There has accordingly been a violation of Article 8 (art. 8).

III. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 3 (art. 3) OF THE CONVENTION

59. Mrs López Ostra submitted that the matters for which the respondent State was criticised were of such seriousness and had caused her such distress that they could reasonably be regarded as amounting to degrading treatment prohibited by Article 3 (art. 3) of the Convention, which provides:

"No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment."

The Government and the Commission took the view that there had been no breach of this Article (art. 3).

60. The Court is of the same opinion. The conditions in which the applicant and her family lived for a number of years were certainly very difficult but did not amount to degrading treatment within the meaning of Article 3 (art. 3).

IV. APPLICATION OF ARTICLE 50 (art. 50) OF THE CONVENTION

61. Under Article 50 (art. 50),

"If the Court finds that a decision or a measure taken by a legal authority or any other authority of a High Contracting Party is completely or partially in conflict with the obligations arising from the... Convention, and if the internal law of the said Party allows only partial reparation to be made for the consequences of this decision or measure, the decision of the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party."

Mrs López Ostra claimed compensation for damage and reimbursement of costs and expenses.

A. Damage

62. The applicant asserted that the building and operation of a waste-treatment plant next to her home forced her to make radical changes to her way of life. She consequently sought the following sums in reparation of the damage sustained:

- (a) 12,180,000 pesetas (ESP) for the distress she suffered from 1 October 1988 to 31 January 1992 while living in her former home;
- (b) ESP 3,000,000 for the anxiety caused by her daughter's serious illness;
- (c) ESP 2,535,000 for the inconvenience caused from 1 February 1992 by her undesired move;
- (d) ESP 7,000,000 for the cost of the new house she was obliged to buy in February 1993 because of the uncertainty of the accommodation provided by the Lorca municipal authorities;
- (e) ESP 295,000 for expenses incurred in settling into the new house.

63. The Government considered that these claims were exaggerated. They pointed out that the Lorca municipal authorities had paid the rent for the flat occupied by Mrs López Ostra and her family in the town centre from 1 February 1992 until she moved into her new house.

64. The Delegate of the Commission found the total sum sought excessive. As regards the pecuniary damage, he considered that while the applicant had theoretically been entitled to claim a new home, she was bound to give her former one in exchange, due allowance being made for any differences in size and characteristics.

65. The Court accepts that Mrs López Ostra sustained some damage on account of the violation of Article 8 (art. 8) (see paragraph 58 above). Her old flat must have depreciated and the obligation to move must have entailed expense and inconvenience. On the other hand, there is no reason to award her the cost of her new house since she has kept her former home. Account must be taken of the fact that for a year the municipal authorities paid the rent of the flat occupied by the applicant and her family in the centre of Lorca and that the waste-treatment plant was temporarily closed by the investigating judge on 27 October 1993 (see paragraph 22 above).

The applicant, moreover, undeniably sustained non-pecuniary damage. In addition to the nuisance caused by the gas fumes, noise and smells from the plant, she felt distress and anxiety as she saw the situation persisting and her daughter's health deteriorating.

The heads of damage accepted do not lend themselves to precise quantification. Making an assessment on an equitable basis in accordance with Article 50 (art. 50), the Court awards Mrs López Ostra ESP 4,000,000.

B. Costs and expenses

1. In the domestic courts

66. The applicant claimed a total of ESP 850,000 for costs and expenses incurred in the domestic courts.

67. The Government and the Delegate of the Commission pointed out that Mrs López Ostra had received free legal aid in Spain, so that she did not have to pay her lawyer, whose fees should be paid by the State.

68. The Court likewise finds that the applicant did not incur expenses in this respect and accordingly dismisses the claim in question. Mr Mazón Costa cannot rely on Article 50 (art. 50) to claim just satisfaction on his own account as he accepted the terms of the legal aid granted to his client (see, among other authorities, the *Delta v. France* judgment of 19 December 1990, Series A no. 191-A, p. 18, para. 47).

2. Before the Convention institutions

69. Mrs López Ostra claimed ESP 2,250,000 for her lawyer's fees in the proceedings before the Commission and the Court, less the sums paid as legal aid by the Council of Europe.

70. The Government and the Delegate of the Commission considered this amount excessive.

71. In the light of the criteria laid down in its case-law, the Court considers it equitable to award the applicant ESP 1,500,000 under this head, less the 9,700 French francs paid by the Council of Europe.

FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY

1. Dismisses the Government's preliminary objections;
2. Holds that there has been a breach of Article 8 (art. 8) of the Convention;
3. Holds that there has been no breach of Article 3 (art. 3) of the Convention;
4. Holds that the respondent State is to pay the applicant, within three months, 4,000,000 (four million) pesetas for damage and 1,500,000 (one million five hundred thousand) pesetas, less 9,700 (nine thousand seven hundred) French francs to be converted into pesetas at the exchange rate applicable on the date of delivery of this judgment, for costs and expenses;
5. Dismisses the remainder of the claim for just satisfaction.

Done in English and in French, and delivered at a public hearing in the Human Rights Building, Strasbourg, on 9 December 1994.

Signed: Rolv RYSSDAL President

Signed: Herbert PETZOLD Acting Registrar